

ANEXO 6:

**INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
(CAJP) DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
(13 DE ABRIL DE 2000)**

**INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS, JUEZ ANTÔNIO A. CANÇADO TRINDADE,
ANTE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS Y POLITICOS DEL
CONSEJO PERMANENTE DE LA
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
(Washington, D. C., 13 de abril de 2000)**

Señor Presidente,

Señoras y Señores Embajadores y Representantes,

Hace poco más de tres semanas, tuve el honor de comparecer a esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para proceder a una extensa presentación de mi Informe, en mi carácter de Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del Diálogo sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, bajo la Presidencia del Embajador Claude Heller de México. Hoy, 13 de abril de 2000, tengo el honor de volver a dirigirme a la OEA, esta vez con el objeto de presentar, ante esta misma Comisión del Consejo Permanente, el *Informe Anual* de la Corte correspondiente al año de 1999, el cual fue enviado a la OEA el día 28 de febrero pasado, y ha sido distribuido entre los Delegados presentes. Seré más breve que la última vez, por cuanto el presente Informe Anual, relativo a 1999, es como un *addendum* al amplio Informe temático que tuve el privilegio de presentarles el día 16 de marzo último.

Los aspectos medulares a tratar de dicho informe son los siguientes:

1. Sometimiento de Nuevos Casos Contenciosos y Medidas Provisionales.

Durante 1999, se sometieron a consideración de la Corte siete nuevos casos contenciosos: Caso *La Última Tentación de Cristo* referente a Chile, Caso *Cantos* relativo a la Argentina, Caso *Ivcher Bronstein* concerniente al Perú, Caso *Hilaire* atinente a Trinidad y Tobago, Caso *El Caracazo* referente a Venezuela, Caso *Trujillo Oroza* relativo a Bolivia y Caso del *Tribunal Constitucional* concerniente al Perú. Por otra parte, se sometió una solicitud de medidas provisionales en el asunto *Digna Ochoa y Plácido y otros* respecto de México.

2. Períodos de Sesiones.

El Tribunal realizó cuatro períodos ordinarios de sesiones durante el año 1999. En dichos períodos de sesiones¹ se realizaron las siguientes actividades: nueve audiencias públicas sobre excepciones preliminares y fondo; se dictaron sentencias de competencia en los casos *Ivcher Bronstein y Tribunal Constitucional*, ambos contra el Perú; sentencias sobre excepciones preliminares en los casos *Cesti Hurtado y Durand y Ugarte*, ambos contra el Perú y *Baena Ricardo y otros* contra Panamá; sentencias de fondo en los casos *Castillo Petruzzi y otros* y *Cesti Hurtado*, ambos contra el Perú, *El Caracazo* contra Venezuela y *Villagrán Morales y otros* contra Guatemala; sentencias de las reparaciones en los casos *Suárez Rosero* contra el Ecuador y *Blake* contra Guatemala; se dictaron sentencias de interpretación de sentencia de reparaciones en los casos *Suárez Rosero* contra el Ecuador, *Loayza Tamayo* contra el Perú y *Blake* contra Guatemala; resoluciones sobre cumplimiento de sentencia en los casos *Loayza Tamayo* y *Castillo Petruzzi y otros*, ambos contra el Perú; se dictaron 11 resoluciones en las medidas provisionales adoptadas en *Clemente Teherán y otros*, *Caballero Delgado y Santana y otros* y *Giraldo Cardona*, todas respecto de Colombia; *James y otros* respecto de Trinidad y Tobago; *Colotenango* y *Carpio Nicolle*, ambas respecto de Guatemala y *Cesti Hurtado* respecto del Perú; se adoptaron las medidas provisionales en el asunto *Digna Ochoa y Plácido y otros* respecto de México y se levantaron parcialmente las medidas ordenadas en el caso *Caballero Delgado y Santana y otros* respecto de Colombia.

Por su parte, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el año 2000, se ha programado dictar 11 sentencias o más en los casos en trámite, así como realizar diversas audiencias públicas con el fin de desahogar el trabajo del Tribunal. Si el presupuesto se recorta, esta situación se modificará inevitablemente.

Como muestra de la tarea ascendente en la resolución de casos contenciosos, tenemos en trámite 27 casos en etapas procesales diferentes y 11 medidas provisionales (cfr. páginas 37-38 del *Informe Anual* de la Corte). Ello reafirma el compromiso de la Corte de atender ese volumen de trabajo con la mayor celeridad posible, sin perjuicio de la seguridad jurídica, claro está, tomando en cuenta las limitaciones materiales y, principalmente, el hecho de no ser un tribunal permanente, lo cual exige un compromiso cada vez mayor de los señores Jueces para sesionar con más regularidad y asumir nuevas obligaciones que deben ser cumplidas en sus domicilios (v.g., redacción de proyectos de sentencias, comunicación más frecuente con la Secretaría de la Corte y con el resto de los Jueces, etc.), labores que son realizadas sin compensación monetaria alguna debido a la falta de provisión de fondos.

3. Aceptación de la Competencia Contenciosa de la Corte.

El 25 de marzo de 1999 la República Dominicana depositó ante la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte. El

1 XLIII (del 18 al 29 de enero), XLIV (del 23 de mayo al 3 de junio), XLV (del 16 de septiembre al 2 de octubre) y XLVI (del 9 al 20 de noviembre) Períodos Ordinarios de Sesiones.

reconocimiento de la competencia de la Corte por los Estados Partes, como lo ha hecho en 1999 la República Dominicana, contribuye a fortalecer y consolidar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el continente americano.

Me permito, a propósito, formular un llamado a los Estados que todavía no lo han hecho a que ratifiquen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconozcan la competencia obligatoria de la Corte en materia contenciosa, a fin de que el sistema de protección se enriquezca con la universalidad de composición en el ámbito regional de su operación. En el presente dominio de protección, las mismas normas y obligaciones deben valer para todos los Estados, jurídicamente iguales.

4. Soluciones Alternativas Temporales ante el Incremento de Trabajo.

El sometimiento de siete nuevos casos contenciosos durante el año 1999 alcanza uno de los puntos más altos de casos presentados a la Corte en un período anual.² Si a ello le agregamos la existencia de 31 asuntos más que ya estaban en trámite (20 casos contenciosos y 11 medidas provisionales) y la posibilidad de que las víctimas o sus familiares presenten escritos y prueba en forma autónoma de la Comisión durante la etapa de reparaciones,³ - lo cual representa un aumento considerable en el trabajo de la Corte y supone la implementación de diferentes mecanismos procesales para la tramitación de los casos - podemos concluir que no es viable continuar con el esquema de trabajo seguido hasta ahora por este Tribunal mientras el mismo no sea permanente. Ante ello, deben buscarse formas alternativas para que la tramitación de casos no tenga una "fila de espera"⁴ que pueda ir en detrimento de las partes procesales y afectar en forma directa la eficiencia del Tribunal y del propio sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Para atender en forma diligente la tramitación del volumen de asuntos que está conociendo la Corte, se requiere continuar, mientras no haya una Corte permanente, con la realización de al menos cuatro sesiones por año de dos semanas de trabajo continuo cada una.

2 Una muestra del cambio en la estructura concebida para la Corte durante sus primeros diez años de funcionamiento se desprende de que durante ese lapso únicamente fueron enviados 3 casos (1986) y contra un mismo Estado (Honduras). En cambio, a partir de la década de los 90's esa cantidad de casos es normalmente sometida durante cada período anual. Este año se da un aumento considerable en el sometimiento de casos ante el Tribunal ya que se presentaron 7.

3 Reglamento aprobado por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de septiembre de 1996 y en vigor a partir del 1 de enero de 1997. El artículo 23 dispone: "En la etapa de reparaciones los representantes de las víctimas o de sus familiares podrán presentar sus propios argumentos y pruebas en forma autónoma."

4 De acuerdo con estadísticas internas de la Secretaría de la Corte, un caso nuevo que ingrese a la Corte debe esperar hasta el año 2003 para que se realice la audiencia sobre el fondo y al menos seis meses más para que se dicte sentencia. A partir de ese momento, la etapa de reparaciones puede tardar un año, sin incluir la fase de cumplimiento de sentencia por parte del Estado demandado.

Lo anterior no es suficiente para resolver la acumulación de casos pendientes de resolución, razón por la cual, la Corte se ha avocado a variar el esquema tradicional de trabajo a fin de tratar de solventar las limitaciones propias de no ser un órgano permanente. En ese sentido, hemos detectado que la duración de las sesiones es insuficiente para emitir una cantidad adecuada de sentencias y resoluciones que cumplan con los estándares de un tribunal internacional. Además, los Jueces deben resolver una serie de asuntos administrativos y participar en extensas audiencias públicas durante esos períodos, lo que limita la atención de las actividades medulares del tribunal.

Por ello, y debido a que los Jueces residen en sus países de origen y son obligados, por necesidad, a dedicarse a actividades ajenas a las de la Corte por no devengar de ésta salario u honorario alguno - salvo por los días trabajados durante sesiones en la sede de la Corte - es que se ha tomado la decisión de crear un sistema para que dichos Jueces puedan dedicar mayor tiempo al trabajo de la Corte para la elaboración, con la anticipación debida, de las relatorías. Estas relatorías serían enviadas para su estudio al resto de los Jueces para aligerar los procesos de discusión durante las deliberaciones en sesión.

Adicionalmente, se han creado comisiones de trabajo de las sentencias para desahogar las discusiones del plenario de la Corte y poder dedicarse este a la deliberación de los aspectos más sustanciales. Lo anterior se justifica como una medida de transición necesaria y contribuye en buena parte a darle mayor fluidez al trabajo de la Corte y de su Secretaría y resulta absolutamente necesario hasta tanto la Corte Interamericana no sea de carácter permanente.

5. Reuniones de Trabajo con Otros Organismos de Derechos Humanos.

El 20 de noviembre de 1999 se realizó, en la sede del Tribunal, una reunión periódica conjunta de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General AG/RES. 1041 (XX-O/90 y AG/RES. 1330 (XXXV-O/95), en la cual se tomaron acuerdos muy valiosos para coordinar mejor el trabajo que ambos organismos realizan. Dos acuerdos fundamentales emergieron de esta reunión: 1) Buscar apoyo conjunto en los organismos internacionales de financiamiento, con el fin de obtener fondos para financiar las actividades de la Corte y de la Comisión, en campos no contemplados en el presupuesto de la OEA; y 2) Estudiar conjuntamente los criterios de envíos de casos a la Corte por la Comisión; el tratamiento de la prueba en la tramitación de los casos, con el fin de que la Comisión las implemente; la supervisión de la ejecución de las sentencias de la Corte; entre otras cuestiones procesales.

Asimismo, los participantes en la reunión resaltaron la importancia del deber de los Estados Partes de dar cumplimiento, de acuerdo con las obligaciones convencionales libremente contraídas (*pacta sunt servanda*), a las decisiones de los dos órganos de supervisión; y los avances registrados en el sistema, en especial, las recientes aceptaciones de competencia de la Corte y la entrada en vigor del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador").

6. Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Durante su XLIII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 18 al 29 de enero de 1999, la Corte acordó desarrollar una serie de actividades tendientes al fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Con ese fin, siendo en aquel entonces Vicepresidente de la Corte, se me designó como relator del proceso y coordinador de una comisión de seguimiento, integrada además por los Jueces Salgado Pesantes, Abreu Burelli y García Ramírez.

Esta comisión de seguimiento organizó un gran seminario, bajo mi coordinación, para conmemorar los 30 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 20 años de la instalación de la Corte Interamericana. El 23 y 24 de noviembre de 1999 la Corte celebró dicho seminario del más alto nivel académico, denominado "*El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI*", en el cual se plantearon, entre otros, temas relativos a las funciones contenciosa y consultiva de la Corte; las funciones de la Comisión Interamericana; el compromiso de la comunidad internacional con la protección internacional efectiva de los derechos humanos y las implicaciones financieras del fortalecimiento del sistema interamericano; el acceso de los individuos a la justicia en el plano internacional y el fortalecimiento del papel de las ONGs en el sistema interamericano.

A su vez, la comisión de seguimiento dispuso la celebración de cuatro reuniones de expertos, dos de ellas en 1999 y dos en el año 2000. Dichas reuniones se llevaron a cabo en la sede de la Corte, bajo mi coordinación, las dos primeras los días 20 de septiembre y 24 de noviembre de 1999, y las dos siguientes en el mes de febrero de 2000. En esas reuniones participaron los Jueces de la Corte, miembros de la Comisión y altas personalidades en el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Durante los referidos encuentros se profundizaron temas tales como la participación de los individuos en el procedimiento ante la Corte; la especificidad del rol de la Comisión Interamericana; la valoración de la prueba; el procedimiento en la fase de excepciones preliminares; el cumplimiento y supervisión de las sentencias de la Corte y de las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión; y los recursos económicos adicionales para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Durante su XLVI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 9 al 20 de noviembre de 1999, la Corte recibió en su sede la visita del Excelentísimo señor Presidente de la República de Paraguay, señor Luis González Macchi, acompañado por el Excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país, señor José Félix Fernández Estigarribia y miembros de la comitiva presidencial.

El 22 de noviembre de 1999 en su sede y con motivo de las ya mencionadas celebraciones, la Corte recibió la visita de la Excelentísima señora Rosario Green, Secretaria de Rela-

ciones Exteriores de México y al Excelentísimo señor José Gregori, Secretario de Estado de los Derechos Humanos de Brasil; acompañados respectivamente por sus comitivas de alto nivel. Asimismo, la Corte recibió la visita del Excelentísimo señor César Gaviria, Secretario General de la OEA, los Ministros de Relaciones Exteriores o sus representantes y las delegaciones oficiales de los Estados miembros de esta Organización.

Finalmente, en el marco de la Reunión de Cancilleres y Jefes de Delegación, celebrada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1999, con motivo de la conmemoración anteriormente citada, se determinó la creación de un Grupo *Ad Hoc* sobre los Derechos Humanos (de Representantes de los Cancilleres), con el fin de darle seguimiento al proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos; el Grupo *Ad Hoc* se reunió en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica el 10 y 11 de febrero de 2000 y en el que tuve el honor de representar a la Corte.

7. Acuerdos de Cooperación Internacional.

Como se ha hecho del conocimiento de esta Comisión del Consejo Permanente de la OEA en oportunidades anteriores, se continuó con la instrumentación del acuerdo de cooperación con la Unión Europea: en este caso, el convenio constitutivo de la tercera etapa del proyecto "Apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos" para consolidar el sistema de divulgación de las publicaciones del Tribunal y desarrollar nuevos recursos y fuentes de información para los usuarios del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Siguiendo la iniciativa de captar recursos externos complementarios para realizar algunas actividades propias del Tribunal por medio de convenios de cooperación, la Corte firmó un convenio de esa naturaleza con el Centro Danés para los Derechos Humanos el 14 de diciembre de 1999. Asimismo, se firmaron convenios de cooperación académica con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México el 31 de mayo de 1999, y con la Escuela Nacional de la Magistratura de Brasil el 8 de octubre de 1999.

Asimismo, se continuó la implementación de los convenios suscritos en años anteriores con la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Carlos III de Madrid.

8. Cumplimiento del Artículo 65 de la Convención Americana.

El artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente:

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. *De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos* [itálica agregada].

Debo, por lo tanto, abordar un asunto delicado y de trascendental importancia para el futuro del sistema regional de protección internacional de derechos humanos, el cual tiene relación con la eficacia de las decisiones del Tribunal (el capítulo H, sobre el estado de cumplimiento de las sentencias de la Corte, puede consultarse a partir de la página 38 del *Informe Anual*).

Me corresponde, de conformidad con lo anterior y con el artículo 65 de la Convención Americana, informar a esta Comisión del incumplimiento por el Estado de Perú de las sentencias emitidas por la Corte en los casos *Castillo Páez*, *Castillo Petruzzi y Otros* y *Loayza Tamayo*, por lo que debo solicitar a la Asamblea General de la OEA que examine la materia con miras al cumplimiento de dichas sentencias por el Estado demandado.

Es importante, sobre este tema, resaltar que, además de constituir el cumplimiento de sentencias una obligación convencional (artículo 68 de la Convención Americana) de los Estados Partes, en la primera reunión celebrada por el Grupo *Ad Hoc* sobre los Derechos Humanos (*supra*), los días 10 y 11 de febrero pasado en Costa Rica, se formuló, entre otras, la siguiente recomendación sobre el papel de los Estados Partes en la Convención Americana como garantes del funcionamiento del sistema de protección y en especial del cumplimiento de las decisiones de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos:

4. Recomendar a los Cancilleres que dentro de las actuales competencias de la Asamblea General y del Consejo Permanente se dé el tratamiento adecuado a los informes de la Comisión y de la Corte como forma de hacer efectivo el deber de los Estados de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los instrumentos del Sistema.

Este, como los demás párrafos del documento final de la referida Reunión, fueron adoptados por consenso; el párrafo anteriormente citado refleja la noción de *garantía colectiva*, subyacente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a todos los tratados de protección de los derechos humanos.

9. Auditoría de Estados Financieros.

Como ya es sana costumbre de la Corte, se practicó una auditoría a los estados financieros de la Corte Interamericana para el período fiscal de 1999 por parte de la firma de auditores Externos Independientes Venegas, Pizarro, Ugarte y Co., Contadores Públicos Autorizados, representantes en Costa Rica de la firma HLB International. La auditoría comprendió tanto los fondos provenientes de la OEA como del aporte del Estado de Costa Rica para el mismo período. Se desprende de dicho informe – de fecha 28 de febrero de 2000 - que los estados financieros de la Corte expresan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la Institución, así como que los ingresos, desembolsos y flujos de efectivo para el período de 1999 se encuentran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados propios de entidades no lucrativas (como es el caso de la Corte) y aplicados sobre bases consistentes. Copia de este informe fue enviado oportunamente al Departamento de Servicios Financieros de la OEA y al Inspector General de la Organización.

10. Presupuesto de la Corte.

Finalmente, hemos sometido a consideración de la Asamblea General un proyecto de presupuesto para el año 2001, que contempla un incremento de un 37% sobre el del año 2000. Esto en razón de que el mismo ha estado congelado durante los últimos tres años, y lo único que la Corte pretende, al recuperar la pérdida del poder adquisitivo por causa del factor inflacionario, es volver al nivel del año 1998. La Corte ha racionalizado sus gastos al máximo y redujo su personal profesional a cuatro abogados únicamente. A este punto ya me había referido en mi último Informe a esta Comisión del Consejo Permanente de la OEA, el día 16 de marzo pasado.

Hace unos pocos días, funcionarios del área de programa de presupuesto de la Secretaría General, informaron a la Secretaría de la Corte de que su presupuesto será reducido en un 13.2% para el presente año, por lo que le dejarán de girar al Tribunal, de abril a diciembre, la suma de \$150.500.00. Hemos solicitado, sin éxito, una reunión con la Comisión de Programa de Presupuesto para explicarles las implicaciones que esta reducción tendrá en el funcionamiento del Tribunal.

Señor Presidente, señores Representantes, reducir en ciento cincuenta mil quinientos dólares el presupuesto de la Corte en estos momentos, significa tener que cancelar dos de las cuatro sesiones programadas para el año 2000, así como la reunión anual conjunta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también, la traducción y publicación del *Informe Anual* relativo al año 2000; y operar la Secretaría de la Corte, de abril a diciembre de 2000, con la suma de 13 mil dólares mensuales. Un nuevo recorte causaría la virtual paralización del Tribunal.

La Corte, por mi medio, desea dejar a salvo su responsabilidad por el retardo de las labores del Tribunal, el resultante atraso en la resolución de los casos y las consecuencias negativas que esto pueda tener sobre las presuntas víctimas o sus familiares. Señor Presidente, Señores Delegados, en nombre de la Corte, por lo tanto, solicito que se reponga al Tribunal el monto recortado, para celebrar al menos una tercera sesión en el año y poder traducir y publicar el *Informe Anual* correspondiente.

Me permito, al respecto, recordar la primera de las conclusiones de la Reunión del Grupo *Ad Hoc* sobre Derechos Humanos, creada por los Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en San José de Costa Rica los días 10 y 11 de febrero pasado, a saber:

1. Recomendar a los Cancilleres que promuevan medidas que permitan aumentar substancialmente los recursos que se precisen para los órganos interamericanos de derechos humanos. A tal efecto, se deberá *dar prioridad* en el presupuesto ordinario de la OEA a la asignación de recursos adicionales [itálica agregada].

El documento que contiene esta y otras conclusiones, como ya me permití recordar, fue adoptado por consenso.

11. Conclusión.

Quisiera concluir la presentación de este *Informe Anual* de la Corte con un mensaje positivo a Ustedes, de parte mía y de mis colegas del Tribunal:

Me permito expresarles la confianza que tiene la Corte en los Estados Partes en la Convención Americana como garantes de la misma. Cabe destacar, en este sentido, como hechos notables:

- *primero*, el aumento en el número de Estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, con los recientes reconocimientos de República Dominicana, Haití, México y Brasil;

- *segundo*, el aporte positivo al sistema de protección que han dado, en los últimos años, varios Estados ante la Corte, los que se han allanado total o parcialmente a las respectivas demandas, aceptando los hechos y su responsabilidad; cabe recordar, en este sentido, los ejemplos alentadores de Suriname (*Aloboetoe*), Venezuela (*El Amparo* y *Caracazo*), Argentina (*Maqueda* y *Garrido* y *Baigorria*), Ecuador (*Benavides Cevallos*), Bolivia (*Trujillo Oroza*), y Guatemala (*Blake*); a ésto se agrega el espíritu de cooperación y lealtad procesales demostrado por otros Estados demandados ante la Corte, revelando de forma inequívoca la confianza depositada en la labor de ésta;

- *tercero*, el reciente cumplimiento ejemplar por parte de Guatemala de la sentencia de reparaciones en el caso *Blake*, sumándose a tantos otros Estados demandados que han también cumplido de manera cabal con sus obligaciones convencionales (como Honduras, Nicaragua y Colombia);

- *cuarto*, el apoyo irrestricto que durante 20 años ha dado el país sede, Costa Rica, inclusive financieramente, al cual se suma la reciente donación de México al Tribunal, destinada a la actualización de sus publicaciones oficiales, ya que el presupuesto de la Organización no contempla fondos para la divulgación de la jurisprudencia de la Corte desde hace muchos años;

- *quinto*, la reciente visita a la Corte, de los Cancilleres - o sus Representantes - de los países de las Américas y del Caribe (en noviembre pasado), con motivo de su 20o. aniversario, así como las históricas visitas a la sede del Tribunal de los Presidentes de las Repúblicas de Paraguay y Brasil;

- *y sexto*, la comprobación del poder de convocatoria de la Corte, para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, por la participación de varios de los más distinguidos juristas del mundo, expertos en la temática de los derechos humanos, que concurrieron al Seminario y a las cuatro Reuniones de Expertos organizados por la Corte. Las conclusiones de estos eventos ya fueron transmitidas a esta Comisión en mi último *Informe*, del 16 de marzo recién pasado.

La Corte reitera su firme apoyo a la labor de esta Comisión, presidida por México (Embajador Claude Heller), en cuanto al Diálogo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección, así como las conclusiones del Grupo *Ad Hoc* sobre Derechos Humanos de Representantes de Cancilleres (febrero de 2000), coordinado por Costa Rica (Canciller Roberto Rojas), acogiendo una constructiva propuesta de Chile (Embajador Carlos A. Portales).

Hemos, pues, ya dado inicio a una evolución irreversible, en favor del fortalecimiento de la salvaguardia internacional de los derechos de la persona humana en nuestra parte del mundo. Urge contar con los recursos humanos y materiales indispensables para la realización plena de lo que a veces parece ser, en nuestro continente, todavía una utopía. No podemos vivir sin utopías, si deseamos realmente construir, para las generaciones futuras, un mundo mejor de lo que encontramos. Confío en que, juntos todos, podamos seguir adelante en la evolución irreversible de la protección internacional de los derechos humanos en nuestra región, para que la realidad de mañana pueda reflejar fielmente lo que sigue pareciendo hoy, a veces, una utopía. Tenemos que actuar a la altura de los desafíos de nuestros tiempos.

Señor Presidente, señores Representantes, en mi nombre, en el del Juez de la Corte, Alirio Abreu Burelli y en el del Secretario, Manuel E. Ventura Robles, quienes me acompañan en este acto, así como en el de todos los Jueces y personal de la Corte, les agradezco la atención prestada en esta ocasión para escuchar la presentación del *Informe Anual* de la Corte Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al año 1999. Muchas gracias por toda la atención.

Washington, D. C., 13 de abril de 2000.

**ADDRESS OF THE PRESIDENT OF THE
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS,
JUDGE ANTÔNIO A. CANÇADO TRINDADE, TO THE
COMMITTEE ON JURIDICAL AND POLITICAL AFFAIRS OF THE PERMANENT
COUNCIL OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
(Washington, D.C., April 13, 2000)**

Mr. President,

Ambassadors and Representatives,

A little over three weeks ago, I had the honor of appearing before this Committee on Juridical and Political Matters (CJPM) of the Permanent Council of the Organization of American States (OAS) to an extensive presentation of my Report, in my capacity of President of the Inter-American Court of Human Rights, in the framework of the Dialogue on the Inter-American System for the Protection of Human Rights, under the Chairmanship of Ambassador Claude Heller of Mexico. Today, on April 13, 2000, I have the honor of addressing OAS again, this time to present before the same Permanent Council's Committee the Court's *Annual Report* for the year 1999, which was sent to OAS last February 28 and has been distributed among the present Delegates. I will speak more briefly than my last time, since this Annual Report, compared to 1999, is like an *addendum* to the comprehensive thematic Report I had the privilege of presenting to you last March 16.

The core features in said report are as follows:

1. Submission of New Contentious Cases and Provisional Measures.

During 1999, seven new contentious cases were brought to the Court's consideration: *The Last Temptation of Christ* Case regarding Chile, *Songs* Case concerning Argentina, *Ivcher Bronstein* Case in relation to Peru, *Hilaire* Case pertaining to Trinidad and Tobago, *El Caracazo* Case referring to Venezuela, *Trujillo Oroza* Case regarding Bolivia, and *Constitutional Court* Case concerning Peru. On the other hand, a petition for provisional measures was filed on the *Digna Ochoa and Plácido et al.* issue, with respect to Mexico.

2. Sessions.

The Court had four regular sessions during 1999. In said sessions¹ the following activities were performed: nine public hearings on preliminary exceptions and merits; the Court rendered competence judgments in the *Ivcher Bronstein* and *Constitutional Court* Cases, both against Peru; judgments on preliminary exceptions in the *Cesti Hurtado* and *Durand and Ugarte* Cases, both against Peru, and *Baena Ricardo et al.* against Panama; judgments on merits in the cases of *Castillo Petruzzi et al.* and *Cesti Hurtado*, both against Peru, *El Caracazo* against Venezuela and *Villagrán Morales et al.* against Guatemala; judgments on reparations in the *Suárez Rosero* Case against Ecuador and *Blake* Case against Guatemala; judgments on reparation judgment interpretation in the cases of *Suárez Rosero* against Ecuador, *Loayza Tamayo* against Peru and *Blake* against Guatemala; decisions on enforcement of judgments in the *Loayza Tamayo* and *Castillo Petruzzi et al.* Cases, both against Peru; 11 decisions were made on the provisional measures adopted in the cases of *Clemente Teherán et al.*, *Caballero Delgado* and *Santana et al.* and *Giraldo Cardona*, all related to Colombia; *James et al.* concerning Trinidad and Tobago; *Colotenango* and *Carpio Nicolle*, both with respect to Guatemala, and *Cesti Hurtado* regarding Peru; provisional measures were adopted in the *Digna Ochoa and Plácido et al.* issue with regard to Mexico and the measures ordered in the *Caballero Delgado and Santana et al.* Case against Colombia were partially lifted.

In turn, according to the budget approved for 2000, we have scheduled to render 11 or more judgments in the cases being heard by the Court, as well as carry out various public hearings to perform the Court's tasks. If the budget is cut, this situation will inevitably change.

As an illustration of the growing task in solving contentious cases, we are processing 27 cases at different procedural stages and 11 provisional measures (cf. pages 37-38 of the Court's *Annual Report*). This reaffirms the Court's commitment to take care of this work load as quick as possible, without detriment to juridical safety, obviously mindful of material limitations and, above all, the fact we are not a permanent court, which demands from Judges an increasing commitment to be in session more regularly and assume new obligations that must be met in their homes (e.g., wording of draft judgments, more frequent communication with the Secretariat of the Court and with the other Judges, etc.), tasks that are carried out with no monetary compensation due to lack of funds.

3. Acceptance of the Court's Contentious Competence.

On March 25, 1999, the Dominican Republic filed with OAS Secretariat General an instrument recognizing the Court's contentious competence. The recognition of the Court's competence by the States Party, as done by the Dominican Republic in 1999, helps in strength-

1 XLIII (January 18 through 29), XLIV (May 23 through June 3), XLV (September 16 through October 2), and XLVI (November 9 through 20) Regular Sessions.

ening and consolidating the inter-American system for the protection of human rights in the American continent.

By the way, I would like to call upon the States that have not yet ratified the American Convention on Human Rights to do so and to recognize the Court's mandatory competence in contentious matters, so the inter-American protection system becomes rich with a universal composition in its regional operating sphere. In the current protection domain, the same norms and obligations should be in force for all the juridically equal States.

4. Temporary Alternative Solutions in the Face of an Increased Workload.

The seven new contentious cases submitted during 1999 make up one of the highest numbers of cases brought to the Court in an annual period.² If we add the existence of 31 more issues that were already in process (20 contentious cases and 11 provisional measures) and the possibility for the victims or their next of kin to present briefs and evidence, autonomously with respect to the Commission, during the reparation stage,³ –which involves a considerable increase in the Court's workload and assumes implementing different procedural mechanisms to process the cases– we can conclude it is not feasible to continue with the work schedule this Court has followed so far, as long as this Court is not a permanent one. In face of it, alternative ways should be found to prevent case processing from having to "stand in line"⁴, which could be to the detriment of the procedural parties and directly affect the efficiency of the Court and even of the inter-American system for the protection of human rights.

In order to diligently process the volume of issues being heard by the Court, as long as there is no permanent Court, we must continue having at least four sessions per year, each consisting of two weeks of continuous work.

The above is not enough to solve the backlog of cases pending a decision, and this is why the Court has engaged in changing the traditional work schedule to try and solve the limitations caused by its not being a permanent organ. In this sense, we have found the session duration to

2 An indication of the change in the Court's structure during its first ten years of operations is that, in said period, only 3 cases were submitted (1986) and all against the same State (Honduras). In turn, starting in the 90's, that amount of cases is typically brought in each annual period. This year there was a considerable increase in the number of cases brought to the Court, given that 7 were submitted.

3 Rules of Procedure approved by decision of the Inter-American Court of Human Rights on September 16, 1996 and in force from January 1, 1997. Article 23 provides that: "At the reparation stage the representatives of the victims or their next of kin shall be able to present their own arguments and evidences autonomously."

4 According to internal statistics of the Secretariat of the Court, a new case brought to the Court must wait until the year 2003 for a hearing on the merits to be held and at least six additional months for a judgment to be issued. From that moment on, the reparation stage may last one year, without including the judgment enforcement phase on the part of the respondent State.

be insufficient for rendering a suitable number of judgments and decisions that meet the standards of an international court. Also, Judges must deal with a series of administrative issues and participate in long public hearings during those periods, which limits the court attention to core activities.

This is why, and because Judges live in their countries of origin and are forced, out of necessity, to engage in activities other than the Court's since they do not earn any salary or fee from it—except for the session days worked at the Court's seat—a decision has been made to create a system for said Judges to spend more time in Court tasks, in order to prepare reports as far ahead as is proper. These reports would be sent to be studied by the other Judges and to expedite the discussion processes during session deliberations.

Additionally, judgment work commissions have been created to relieve Court plenary discussions and to let the plenary focus on the deliberation of more substantial issues. The above is justified as a necessary transition measure and does much to make the Court and its Secretariat work smoother, besides being absolutely necessary while the Inter-American Court is not of a permanent nature.

5. Work Meetings with Other Human Rights Organizations.

On November 20, 1999, at the Court's seat, there was a joint periodical work meeting with the Inter-American Commission on Human Rights to enforce General Assembly decisions AG/RES. 1041 (XX-O/90) and AG/RES. 1330 (XXXV-O/95), where very valuable agreements were reached to better coordinate the work carried out by both organizations. Two fundamental agreements came out of this meeting: 1) Searching for the joint support of international financing organizations, with a view to obtaining funds to finance Court and Commission activities, in areas not covered in OAS budget; and 2) Jointly studying the criteria for the Commission to submit cases to the Court; the treatment of evidence in processing cases, in order for the Commission to implement it; the supervision of Court judgment implementation; among other procedural issues.

Similarly, participants in the meeting highlighted the importance of State Party duty to comply with the decisions of the two supervision organs, according to the freely contracted conventional obligations (*pacta sunt servanda*); and the progress made in the system, particularly the recent acceptances of the Court's competence and the coming into force of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Matter of Economic, Social, and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador").

6. Strengthening of the Inter-American System for the Protection of Human Rights.

During its XLIII Regular Session, held on January 18 to 29, 1999, the Court decided to develop a series of activities tending to strengthen the inter-American system for the protection of human rights. To that end, myself being then the Vice President of the Court, I was desig-

nated as process rapporteur and coordinator of a follow-up commission, additionally composed of Judges Salgado Pesantes, Abreu Burelli, and García Ramírez.

This follow-up commission organized a big seminar, under my coordination, to commemorate the 30th anniversary of the American Convention on Human Rights and the 20th anniversary of Inter-American Court's installation. On November 23 and 24, 1999, the Court carried out said seminar of the highest academic level, called "*The Inter-American System for the Protection of Human Rights at the Threshold of the 21st Century*", where discussions were held on several issues, including subjects concerning the Court's contentious and consultive functions; the Inter-American Commission's functions; the international community commitment to the effective international protection of human rights and the financial implications of strengthening the inter-American system; individuals' access to justice at the international level and the strengthening of NGO role in the inter-American system.

Similarly, the follow-up commission decided to hold four expert meetings, two of them in 1999 and two in 2000. Said meetings took place at the Court's seat, under my coordination, the first two on September 20 and November 24, 1999, and the other two in February, 2000. Participants in these meetings were the Judges of the Court, members of the Commission, and top personalities in the field of International Law on Human Rights.

During said encounters we delved deeper into such subjects as the participation of individuals in the procedure before the Court; the specificity of the Inter-American Commission's role; the test of evidence; the procedure in the preliminary exception phase; the enforcement and supervision of Court judgments and Commission report recommendations; and the additional economic resources to strengthen the inter-American system for the protection of human rights.

During its XLVI Regular Session, from November 9 through 20, 1999, the Court's seat was visited by His Excellency the President of the Republic of Paraguay, Mr. Luis González Macchi, accompanied by His Excellency the Minister of Foreign Affairs of said country, Mr. José Félix Fernández Estigarribia and members of the presidential entourage.

On November 22, 1999, on the occasion of the already mentioned celebrations at the seat, the Court hosted Her Excellency Ms. Rosario Green, Secretary of Foreign Affairs, Mexico, and His Excellency Mr. José Gregori, Secretary of State for Human Rights, Brazil; respectively accompanied by their high level entourages. Also, the Court was visited by His Excellency Mr. César Gaviria, OAS Secretary General, the Ministers of Foreign Affairs or their representatives and official delegations from this Organization's Member States.

Finally, in the framework of the Meeting of Ministers of Foreign Affairs and Heads of Delegation, held in San José, Costa Rica, on November 22, 1999, on the occasion of the above-mentioned commemoration, a decision was made to create an *Ad Hoc* Group on Human Rights

(made up of Representatives of Ministers of Foreign Affairs), with a view to follow up on the process to strengthen the inter-American system for the protection of human rights; the *Ad Hoc* Group met at Costa Rica's Ministry of Foreign Affairs, on February 10 and 11, 2000, where I had the honor of representing the Court.

7. International Cooperation Agreements.

As we have advised this Commission of OAS Permanent Council in previous occasions, the Court continued formalizing the cooperation agreement with the European Union: in this case, the articles of agreement for the third stage of the project on the "Support to the Inter-American Court of Human Rights" to consolidate the Court publication dissemination system and develop new information resources and sources for the users of the inter-American system for the protection of human rights. Following the initiative of mobilizing complementary external resources to perform some activities pertaining to the Court through cooperation agreements, the Court entered an agreement with the Danish Center for Human Rights on December 14, 1999. Also, academic cooperation agreements were signed with the Juridical Investigation Institute of Mexico's National Autonomous University, on May 31, 1999, and with Brazil's National Judiciary School on October 8, 1999.

Likewise, we continued implementing the agreements signed in previous years with the Supreme Court of Justice of the Republic of Costa Rica, the Supreme Court of Justice of the Republic of Venezuela, the United Nations Development Program, and the "Carlos III" University in Madrid.

8. Compliance with Article 65 of the American Convention.

Article 65 of the American Convention on Human Rights establishes the following:

The Court shall submit to the consideration of the General Assembly of the Organization, in each regular session, a report on its work during the previous year. *Particularly and with the relevant recommendations, it shall indicate the cases where a State has not complied with its judgments* [emphasis added].

Therefore, I must address a delicate issue of transcendental importance to the future of the regional system for international protection of human rights, which is related to the efficacy of Court decisions (chapter H, on the status of Court judgment enforcement, may be consulted starting in page 38 of the *Annual Report*).

In accordance with the above and with Article 65 of the American Convention, it falls to me to inform this Commission about the State of Peru's failure to comply with judgments issued by the Court in the *Castillo Páez*, *Castillo Petruzzi et al.* and *Loayza Tamayo* Cases, by reason of which I must request OAS General Assembly to examine the matter with a view to have the respondent State enforce said judgments

On this issue it is important to note that, in addition to the fact that enforcement of judgments is a conventional obligation (Article 68 of the American Convention) of the States Party, the first meeting held by the *Ad Hoc* Group on Human Rights (*supra*), last February 10 and 11 in Costa Rica, issued the following recommendation, among others, regarding the role of States Party to the American Convention as guarantors of the protection system performance and, particularly, the enforcement of decisions made by the organs of the inter-American system for the protection of human rights:

4. To recommend the Ministers of Foreign Affairs, within the current competences of the General Assembly and the Permanent Council, that an adequate treatment be given to the reports of the Commission and the Court as a way of enforcing the States' duty to guarantee compliance with the obligations issued by the System's instruments.

This and the other paragraphs of said Meeting's final document were adopted by consensus; the aforementioned paragraph reflects the notion of *collective guarantee*, underlying the American Convention on Human Rights and all the human rights protection treaties.

9. Financial Statement Audit.

As a sound practice already established by the Court, an audit was made on the Inter-American Court's financial statements for the 1999 fiscal year by the independent external auditing firm Venegas, Pizarro, Ugarte y Co., Certified Public Accountants, representatives of the firm HLB International in Costa Rica. The audit covered both the funds coming from OAS and the contribution by the State of Costa Rica for the same period. Said report –dated February 28, 2000– suggests that the Court's financial statements suitably depict the Institution's financial and endowment situation, and that revenues, outlays, and cash flow for the 1999 period are in agreement with the generally accepted accounting principles for non-profit organizations (such as the Court) and are applied on consistent bases. A copy of this report was sent in due time to OAS Department of Financial Services and to the Organization's Inspector General.

10. Court Budget.

Lastly, we have submitted to the General Assembly's consideration a draft budget for 2001 that plans for a 37% increase over the 2000 budget. The reason is that the budget has been frozen for the last three years and the only thing intended by the Court is to go back to the 1998 level, by recovering the loss in purchasing power caused by inflation. The Court has rationalized its expenses as much as possible and downsized its professional staff to just four lawyers. I had already made reference to this point in my last Report to this Commission of OAS Permanent Council, last March 16.

A few days ago, officials from the Secretariat General's budget program area informed the Secretariat of the Court that their budget will be reduced by 13.2% this year and, hence, they

will not give the Court, from April to December, the amount of \$150,500.00. We have unsuccessfully requested a meeting with the Budget Program Commission to explain to them the implications this cut will have on Court operations.

Mr. President, gentlemen Representatives, reducing the Court's budget by one hundred and fifty thousand five hundred dollars at this time means having to cancel two of the four sessions scheduled for the year 2000, as well as the joint annual meeting with the Inter-American Commission on Human Rights and also the translation and publication of the 2000 *Annual Report*; and operate the Secretariat of the Court, from April through December, 2000, with the amount of 13 thousand dollars per month. A new cut would virtually cause the Court to stop.

Through my words, the Court wishes to state that it is not to be held responsible for its slow operations, the resultant delay in case solution, and the negative consequences this may have on the alleged victims or their relatives. Mr. President, gentlemen Delegates, on behalf of the Court, therefore, I request that the Court be restored the curtailed amount, in order to hold at least a third session this year and be able to translate and publish the corresponding *Annual Report*.

In this respect, I would like to recall the first of the conclusions reached at the Meeting of the *Ad Hoc* Group on Human Rights, created by the Ministers of Foreign Affairs, which took place in San José, Costa Rica, last February 10 and 11, to wit:

1. To recommend that Ministers of Foreign Affairs promote measures to substantially increase the resources needed by the inter-American organs of human rights. To such an effect, *priority should be given* in OAS regular budget to the allocation of additional resources [emphasis added].

The document containing this and other conclusions was adopted by consensus, as I already remarked.

11. Conclusion.

I would like to close the presentation of this *Annual Report* with a positive message to You, from myself and my colleagues at the Court:

I'd like to express the Court's confidence in the States Party to the American Convention on Human Rights as guarantors of it. In this sense, it is fit to highlight the following noteworthy facts:

- *first*, the increase in the number of States that have accepted the Court's contentious competence, with the recent recognitions by the Dominican Republic, Haiti, Mexico, and Brazil;

- *second*, the positive contribution to the protection system made before the Court, in the last few years, by several States that have totally or partially acquiesced to the respective applications, accepting the facts and their responsibility; in this sense it is worth recalling the encouraging examples of Surinam (*Aloeboetoe*), Venezuela (*El Amparo* and *Caracazo*), Argentina (*Maqueda* and *Garrido and Baigorria*), Ecuador (*Benavides Cevallos*), Bolivia (*Trujillo Oroza*), and Guatemala (*Blake*); added to this is the spirit of cooperation and procedural loyalty shown by other respondent States before the Court, unmistakably revealing their trust in the Court's work;
- *third*, Guatemala's recent exemplary enforcement of the reparation judgment in the *Blake* Case, joining so many other respondent States who have also complied thoroughly with their conventional obligations (such as Honduras, Nicaragua, and Colombia);
- *fourth*, the unrestricted and even financial support provided to the Court for 20 years by the host country, Costa Rica, coupled with the recent Mexican donation to the Court aimed at updating its official publications, since the Organization's budget stopped covering funds to disseminate the Court's case law many years ago;
- *fifth*, the recent visit to the Court by the Ministers of Foreign Affairs –or their representatives– from countries in the Americas and the Caribbean (last November), on the occasion of its 20th anniversary, as well as the historical visits of the Presidents of the Republics of Paraguay and Brazil to the Court's seat;
- and *sixth*, the verification of the Court's summoning power, with a view to strengthening the inter-American system of human rights, evidenced by the participation of the most distinguished jurists in the world, experts on the subject of human rights, who attended the Seminar and the four Expert Meetings organized by the Court. The conclusions of these events were already transmitted to this Commission in my last *Report*, last March 16.

The Court renews its strong support to the work of this Commission, chaired by Mexico (Ambassador Claude Heller), with regard to the Dialogue on the Strengthening of the Inter-American Protection System, as well as the conclusions of the *Ad Hoc* Group on Human Rights made up of Representatives of Ministers of Foreign Affairs (February, 2000), coordinated by Costa Rica (Minister of Foreign Affairs, Mr. Roberto Rojas), accepting a constructive proposal made by Chile (Ambassador Carlos A. Portales).

We have, then, started an irreversible revolution, in favor of strengthening the international safeguard of the rights of the human person in our part of the world. It is urgent to have the indispensable human and material resources to fully realize what sometimes still seems to be, in our continent, a utopia. We cannot live without utopias, if we really wish to build a better world than what we found for the future generations. I trust that we, all together, will be able to move forward in the irreversible revolution of the international protection of human rights in our region, so that tomorrow's reality can faithfully reflect what sometimes seems today like an utopia. We must act to meet the challenges of our times.

ANEXO 6

Mr. President, gentlemen Representatives, on my behalf and on behalf of the Judge of the Court, Alirio Abreu Burelli and the Secretary, Manuel E. Ventura Robles, who are with me in this act, as well as all the Judges and Court staff, I thank you for your attention in listening to my presentation of the 1999 *Annual Report* of the Inter-American Court of Human Rights. Thank you very much for your attention.

Washington, D.C., April 13, 2000.